

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPTO. DE CORRESPONDENCIA
ARCHIVO Y MICROFILMACION

AÑO XCI

PANAMA, R. DE P., VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 1995

Nº22,900

CONTENIDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RESOLUCION Nº 232

(De 24 de agosto de 1995)

"DECLARA FINIQUITADA LA ACTUACION DEL SEÑOR ALEJANDRO GARRIDO AROSEMENA." PÁG. 1

RESOLUCION Nº 233

(De 24 de agosto de 1995)

"DECLARA FINIQUITADA LA ACTUACION DEL SEÑOR ENRIQUE A ZARAK LINARES." PÁG. 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FALLO DE 5 DE OCTUBRE DE 1995 PÁG. 4

AVISOS Y EDICTOS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RESOLUCION Nº 232

(De 24 de agosto de 1995)

MICROFILMADO

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales

CONSIDERANDO:

Que mediante solicitud formal presentada a esta Contraloría General el 29 de junio de 1995, el ex Cónsul de Panamá en Bangkok, Thailandia señor ALEJANDRO GARRIDO AROSEMENA, con cédula de identidad personal Nº 8-230-682, requiere se le expida el finiquito correspondiente a su gestión consular durante el período de noviembre de 1991 hasta febrero de 1995, por haber rendido y cancelado sus cuentas a la Dirección General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Que en el Departamento de Fiscalización Consular y Marina Mercante de la Dirección Consular - Comercial de la Contraloría General de la República, reposan copias de los documentos expedidos durante su gestión consular, así como copias de cada uno de los Estados de Cuenta remitidos por la Dirección General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, debidamente verificados y analizados por nuestros auditores, según memorando Nº 105-95-DCC-CMM de 2 de agosto de 1995, en los cuales se pudo determinar que el ex Cónsul ALEJANDRO GARRIDO A., canceló su último saldo hasta el mes de febrero de 1995, según se refleja en el Estado de Cuenta Nº 608-612-CN de 11 de mayo de 1995 y Liquidación de Ingreso Nº 9416 de 27 de abril de 1995.

Que mediante Decreto Nº 473 de 15 de diciembre de 1994, se deja sin efecto el nombramiento del señor ALEJANDRO GARRIDO AROSEMENA, como Cónsul General de Primera Categoría de Panamá en Bangkok, Thailandia.

Que en la actualidad el señor ALEJANDRO GARRIDO AROSEMENA, se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional, en cuanto a su gestión consular, según lo

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

Fundada por el Decreto de Gabinete N° 10 del 11 de noviembre de 1903

LICDO. JORGE SANIDAS A.
DIRECTOR

OFICINA

Avenida Norte (Eloy Alfaro) y Calle 3a. Casa N° 3-12.
Edificio Casa Amarilla, San Felipe Ciudad de Panamá.
Teléfono 228-8631. Apartado Postal 2189

Panamá, República de Panamá
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS

PUBLICACIONES

NUMERO SUELTO: B/. 0.80

MARGARITA CEDEÑO B.
SUBDIRECTORA

Dirección General de Ingresos

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES

Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00

Un año en la República B/.36.00

En el exterior 6 meses B/.18.00, más porte aéreo

Un año en el exterior. B/.36.00, más porte aéreo

Todo pago adelantado.

demuestra el certificado N° 608-15-95-CN de 6 de junio de 1995, expedido por la Dirección General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar finiquitada la actuación del señor ALEJANDRO GARRIDO AROSEMENA, con cédula de identidad personal N° 8-230-682, en su calidad de ex Cónsul de Panamá en Bangkok, Thailandia, correspondiente al ejercicio de sus funciones consulares durante el período de noviembre de 1991 hasta febrero de 1995, de quien se evidenció la rendición correcta de cuentas a su ejercicio y que fueron fenecidas sin responsabilidad patrimonial.

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución se emite para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Dado en la ciudad de Panamá a los 24 días del mes de agosto de 1995.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

ARISTIDES ROMERO JR.
Contralor General

Lic. JAIME ROQUEBERT T.
Secretario General

Copia auténtica de su original

RESOLUCION N° 233
(De 24 de agosto de 1995)

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales

CONSIDERANDO:

Que mediante solicitud formal presentada a esta Contraloría General el 30 de mayo de 1995, el ex Cónsul de Panamá en Seúl, Corea, señor ENRIQUE A. ZARAK LINARES, con cédula de identidad personal N° PE-1-315, requiere se le expida el

finiquito correspondiente a su gestión consular durante el período de agosto de 1990 hasta octubre de 1994, por haber rendido y cancelado sus cuentas a la Dirección General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Que en el Departamento de Fiscalización Consular y Marina Mercante de la Dirección Consular - Comercial de la Contraloría General de la República, reposan copias de los documentos expedidos durante su gestión consular, así como copias de cada uno de los Estados de Cuenta remitidos por la Dirección General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, debidamente verificados y analizados por nuestros auditores, según memorando Nº 083-95-DCC-CMM de 19 de junio de 1995, en los cuales se pudo determinar que el ex Cónsul ENRIQUE A. ZARAK LINARES, ha rendido sus informes consulares satisfactoriamente hasta octubre de 1994, fecha en que culmina su gestión consular.

Que mediante Resuelto Nº 867 de 14 de septiembre de 1994, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue aceptada la renuncia del señor ENRIQUE ZARAK LINARES.

Que en la actualidad el señor ENRIQUE A. ZARAK LINARES, se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional, en cuanto a su gestión consular, según lo demuestra el certificado Nº 608-10-95-CN de 19 de mayo de 1995, expedido por la Dirección General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, en cuanto a su gestión consular se refiere.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar finiquitada la actuación del señor ENRIQUE A. ZARAK LINARES, con cédula de identidad personal Nº PE-1-315, en su calidad de ex Cónsul de Panamá en Seúl, Corea, correspondiente al ejercicio de sus funciones consulares durante el período de agosto de 1990 hasta octubre de 1994, de quien se evidenció la rendición correcta de cuentas a su ejercicio y que fueron fenecidas sin responsabilidad patrimonial.

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución se emite para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Dado en la ciudad de Panamá a los 24 días del mes de agosto de 1995.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

ARISTIDES ROMERO JR.
Contralor General

Lic. JAIME ROQUEBERT T.
Secretario General

Copia auténtica de su original

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
FALLO DE 5 DE OCTUBRE DE 1995

Entrada No. 310-93A
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, interpuesta por la firma forense ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS, en representación de EXPRESO VERAGUENSE, S.A., para que se declare nulo por ilegal, el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 186 de 28 de junio de 1993, emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESHI DE AGUILERA.,

Panamá, cinco (5) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995).

V I S T O S:

La firma forense ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de EXPRESO VERAGUENSE, S.A., ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 186 de 28 de junio de 1993, emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, para reglamentar la Ley No. 14 de 26 de mayo de 1993, mediante la cual se regula el Transporte Terrestre Público de Pasajeros y se dictan otras disposiciones.

Admitida la presente demanda se ordenó correrle traslado al señor Procurador de la Administración quién contestó la demanda mediante la Vista Fiscal No. 62 de 9 de febrero de 1994, y se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

Al rendir su informe este funcionario manifestó lo siguiente:

....
El Decreto Ejecutivo No. 186 de 28 de junio de 1993, nace de la responsabilidad del Organismo Ejecutivo, como Ente Regulador en la ejecución de la Ley 14, con miras a brindarle a la ciudadanía un servicio público de transporte terrestre de pasajeros, asegurando los derechos del usuario y

transportista.

Con esta disposición legal se garantiza el derecho de los transportistas que actualmente prestan el servicio de transporte público, cumpliendo con uno de los principios rectores de la Ley, que es el de fomentar en los transportistas la consolidación y constitución de organizaciones conformadas en una sola unidad administrativa, lo cual le permite al Ente Regulador establecer las normas para el mejor funcionamiento de una ruta, línea o piquera, "poder por medio de estudios técnicos estadísticos determinar las unidades requeridas para una ruta determinada y acorde al crecimiento demográfico de la población a la que se le prestará el servicio. Las mismas serán las responsables ante el Ente Regulador por las frecuencias de salidas, tarifas y unidades, y así al incumplirlas, el Estado podrá aplicar las sanciones correspondientes.

Al darse un conflicto de intereses el Estado como garante del interés público y el bienestar social tiene la obligación constitucional de garantizar la prestación del servicio de manera eficiente y segura, tal como se establece en el artículo 256 de nuestra Carta Magna...

El contrato de concesión definitivo le permitirá al Ente Regulador mantener el control, el orden y seguridad de funcionamiento de la prestación por parte de la persona jurídica. Sabiamente el artículo 14 del Decreto 186, en su párrafo final determina que esta consolidación no afectará en su patrimonio a ninguno de los concesionarios.

El Estado al emitir este Decreto ha cumplido con los objetivos cardinales de la Ley 14 de 26 de mayo 1993, al fomentar en el transportista distintas formas de organización para una mejor prestación del servicio y el mejoramiento económico de los concesionarios". (fs. 49-51).

Evacuados los demás trámites de Ley, la Sala procede a resolver la presente controversia, previas las siguientes consideraciones.

La parte actora estima que el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 186 de 23 de junio de 1993, viola los artículos 18, 21 y 24 de la Ley 14 de 26 de mayo de 1993.

El demandante considera violado el artículo 18 de la Ley 14 de 1993, de manera directa por omisión, porque esta norma garantiza a los transportistas que actualmente prestan el servicio de transporte terrestre público en sus distintas modalidades, seguir prestándolo en forma definitiva, a la vez que reconoce el derecho de concesión individualizada, a las personas jurídicas ya organizadas, dándole un término a aquellos prestatarios del servicio de transporte terrestre público de pasajeros, que no estuvieren organizados como personas jurídicas, a fin de que se constituyan como tal. Sin embargo, el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 186 pretende añadir la condición de que todo concesionario o persona jurídica que preste el servicio de transporte en una misma línea, ruta o piquera debe organizarse y constituirse en una sola organización, conformada por una persona jurídica en cualquiera de sus modalidades. Esta adición considera la parte actora está viciada de nulidad, porque la potestad reglamentaria que ejerce el Ejecutivo (Ministerio de Gobierno y Justicia) es limitada y so pretexto de interpretar la Ley, lo cual tampoco puede hacer, no le es dable ampliar o restringir el sentido de la Ley, introduciendo nuevos elementos o condiciones, porque no estaría entonces reglamentando, sino legislando en detrimento del principio de separación de los poderes (fs. 41).

De igual forma el demandante estima que el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 186 viola directamente por comisión, el artículo 21 de la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, porque mientras este se refiere directamente a un contrato de concesión, teniendo en cuenta la individualidad de los mismos, conforme el sentido y dirección concordante

que guarda y persigue la Ley, el Decreto Ejecutivo No. 186 de 1993, instrumento legal secundario, se refiere a la consolidación de tales organizaciones. Esto en opinión de la parte actora rompe con el principio de que lo accesorio, el Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 186 de 28 de junio de 1993), debe seguir la suerte de lo principal que es la Ley No 14 de 26 de mayo de 1993, de la cual se origina y debe obedecer como parte integrante (fs. 42).

Señala también que el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 186 de 1993, viola directamente por comisión, el artículo 24 de la Ley 14 de 1993, porque el Ejecutivo al reglamentar esta Ley, debió atender su contexto antes de introducir en el artículo 14 del Decreto reglamentario el elemento de la consolidación (fs. 43).

Finalmente la parte actora indica, con referencia a este cargo de violación que, si es la voluntad del legislador darle garantía plena a las concesiones definitivas, ese derecho debió mantenerse inalterable en toda su extensión, sin poder ser sometido a condiciones reglamentarias distintas, porque el Ejecutivo tenía limitadas sus facultades al expedir un instrumento que complementa la ley, ya que el artículo 24 de la Ley No. 14 de 1993, tiende a guardar el orden y asegurar los derechos de las organizaciones concesionarias definitivas; muy por el contrario el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 186 de junio de 1993, se excede en su función y adiciona al funcionamiento de esa organización, la condición de la solidarización que, fuera de no ser contemplada por la ley No. 14 de 1993, en los artículos señalados como violados, resulta viciada de ilegalidad, y por ende, crea y provoca situaciones conflictivas en su aplicación práctica, advertidas con antelación

por el legislador.

El señor Procurador de la Administración en su Vista Fiscal No. 62 de 9 de febrero de 1994, al referirse a los anteriores cargos de violación, señaló que por estar íntimamente relacionados entre sí los analizaría en su conjunto.

El representante del Ministerio Público indicó que, con arreglo a la Ley No. 14 de 26 de mayo de 1993 (mediante la cual se regula el transporte terrestre público de Pasajeros y se dictan otras disposiciones) el servicio público de transporte terrestre en la República de Panamá está sujeto a ciertas condiciones y el ente regulador conserva ciertas atribuciones. Agrega también que, la concesión del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, tal como ha sido concebida en la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, involucra varios aspectos entre los cuales el señor Procurador destaca los siguientes:

1. La concesión definitiva será otorgada por el Ente Regulador, en base a ciertos parámetros (artículo 19).
2. La intervención del Ente Regulador para asegurar la operación eficiente del servicio cuando en una misma ruta converjan varias líneas de transporte (artículo 21).
3. Los derechos y obligaciones del concesionario y concedente, la facultad del Ente Regulador en la fiscalización e inspección de los servicios propios de la concesión (artículo 22).
4. La potestad de que goza el ente Regulador para reglamentar el sistema tarifario (artículo 23).
5. La accesibilidad que tendrán los concesionarios con el Ente Regulador, para la modificación de los reglamentos internos de operación, disciplina y control (artículo 25).
6. Se establecen las causales de terminación del contrato de concesión (artículo 28) (fs. 62-63).

El señor Procurador de la Administración señaló que con base en lo anterior, el Ente Regulador tiene ciertas

atribuciones que están contempladas en la Ley No. 14 de 1993, por lo que es claro que la intervención de Ministerio de Gobierno y Justicia emana de la propia Ley de Transporte vigente en nuestro país. Sin embargo, en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 186, el Ministerio de Gobierno y Justicia se extralimitó al reglamentar el servicio de la concesión de transporte terrestre público selectivo y colectivo de pasajeros, estipulado en la Sección II del Capítulo IV de la Ley 14 de 16 de mayo de 1993. Esto es así porque se impone a las personas jurídicas que prestan el servicio en una ruta específica, la formación de una sola organización "que debe estar conformada por una persona jurídica en cualquiera de sus modalidades" (fs. 64), desconociendo por completo lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de transporte.

Por lo tanto, en opinión del señor Procurador, siendo la Ley No. 14 de 1993 una norma de superior jerarquía en relación con el Decreto Ejecutivo No. 186, este no puede contradecir lo estipulado en la Ley de transporte Terrestre Público de Pasajeros actualmente vigente en nuestro país. El Decreto Ejecutivo No. 186 de 1993, al introducir un elemento de obligatorio cumplimiento que la Ley había declarado expresamente no obligatorio para quienes estuviesen operando bajo organización de persona jurídica una ruta, desconoce completamente la dispensa de este requisito que otorga la Ley violando de esta manera la potestad reglamentaria concedida por la norma legal.

Para resolver la controversia planteada en el presente proceso mediante el cual se pretende que se declare la ilegalidad de uno de los artículos de un Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de la República y el Ministro de

Gobierno y Justicia, en ejercicio de la potestad reglamentaria establecida en el numeral 10 del artículo 179 de la Constitución Nacional, la Sala debe proceder a confrontar el artículo atacado del reglamento que pertenece a la categoría de los de ejecución de las leyes, con los artículos de la ley reglamentada que se estima violados.

En la resolución de 29 de octubre de 1991, dictada en el Proceso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por el licenciado Luis A. Shirley, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo Nº 14 de 7 de mayo de 1990, expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la Sala Tercera de la Corte expresó lo siguiente:

"Los reglamentos, por su relación con las leyes, pueden ser de tres clases en nuestro sistema jurídico, a saber: los de ejecución de las leyes, los autónomos y los de necesidad o de urgencia.

Los reglamentos de ejecución de las leyes, a los que se refiere expresamente el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución, son aquellos dictados por el Presidente de la República y el Ministro respectivo para asegurar o facilitar el cumplimiento o aplicación de las leyes. Esta es la hipótesis tradicional y se trata de una actividad de la Administración Pública subordinada a la ley y con límites propios: no pueden alterar el texto ni el espíritu de la ley que reglamentan...

11.- Los límites de la potestad reglamentaria.

La potestad reglamentaria de las leyes posee una serie de límites que se derivan tanto del principio constitucional de "la reserva de la Ley" como de la naturaleza de los reglamentos, particularmente los reglamentos de ejecución de la ley, que están subordinados a ésta.

Hay que señalar, en primer término, que de acuerdo con el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución, el Presidente de la República y el Ministro respectivo pueden reglamentar las leyes que lo requieran para

su mejor cumplimiento. Debe existir, pues, una necesidad de reglamentación para facilitar la ejecución de la Ley. Mientras más detallada sea la ley menor será la necesidad de reglamentarla para asegurar su cumplimiento ya que, en este caso, la ley contiene los pormenores que se requieren para su cumplimiento y poco podrá agregar el reglamento. Por el contrario, la potestad reglamentaria tendrá mayor extensión cuando la ley, por ser de concisa o parca redacción, requiere que se detallen con mayor precisión y concreción los elementos necesarios para su cumplimiento...

La Sala ha señalado en la sección anterior de esta sentencia que todo reglamento está subordinado tanto a la Constitución como a las leyes, de conformidad con el artículo 15 del Código Civil. El respeto a la jerarquía normativa es, como queda dicho, uno de los límites formales de la potestad reglamentaria." (Registro Judicial de octubre de 1991, página 145).

También resulta oportuno transcribir lo expresado sobre esta materia por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada el 8 de febrero de 1993, para resolver el proceso de inconstitucionalidad promovido por la licenciada Edisa Flores de De la Rosa, en contra de los artículos 1 y 4 del Decreto N° 65 de 3 de marzo de 1990, emitido por el Contralor General de la República. En dicha resolución esta Corporación de Justicia expresó:

"También existen límites de la potestad reglamentaria que pueden ser de carácter formal, cuando atañen a la competencia para dictar el reglamento, y de carácter material, que hacen relación con la limitación de la potestad discrecional de reglamentar las leyes, que debe ejercerse en interés público y no con abuso o desviación de poder. Por último, estarían algunos límites que se derivan de la propia naturaleza de los reglamentos que, según el tratadista español Fernando Garrido Falla, "no pueden derogar ni modificar el contenido de las leyes formales ni de otros reglamentos dictadas por autoridad de mayor jerarquía; los reglamentos independientes no deben limitar derechos subjetivos ni situaciones jurídicas adquiridas por los particulares, no deben regular cuestiones que por su naturaleza pertenezcan al campo jurídico

privado y los derogatorios de otros reglamentos anteriores deben respetar los derechos adquiridos" (Tratados de Derecho Administrativo, Volúmen I, Undécima Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1989, págs. 241 y 242)." (Registro Judicial de febrero de 1993, página 39)

Como se expuso en los citados precedentes, la potestad del Organo Ejecutivo para reglamentar cualquier ley dictada por el Organo Legislativo, se limita a la de desarrollarla dentro de los límites establecidos por la propia ley, para hacer viable su aplicación, sin cambiar su sentido, ni aumentar o disminuir su radio de acción. Esto es así porque el reglamento es de inferior jerarquía que la ley, y no puede reformarla en forma alguna, sólo puede regularla para facilitar su ejecución.

La Sala comparte el criterio expresado por el señor Procurador de la Administración en su Vista Fiscal, en cuanto a que el artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 186 de 1993, desconoce lo preceptuado en la Ley Nº 14 de 1993, del Transporte Terrestre Público de Pasajeros, porque el artículo 18 de la Ley Nº 14, considerado por la parte actora como violado, preceptúa que los transportistas que en la actualidad prestan el servicio de transporte de pasajeros en sus distintas modalidades en una línea, ruta o piquera determinada, seguirán prestando el servicio en forma definitiva, reconociéndosele el derecho de concesión a las personas jurídicas bajo las cuales estén organizados, y agrega que, aquellos transportistas que no estén organizados como personas jurídicas, deben hacerlo dentro de un plazo de seis (6) meses luego de la entrada en vigencia de esta Ley.

Por su parte, con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 186 de 1993, se pretende que si varios concesionarios o

transportistas organizados en personas jurídicas prestan el servicio en una misma línea, ruta o piquera, procedan en el mismo término (refiriéndose a los seis meses señalados en el artículo anterior), a consolidarse y constituir una sola organización que debe estar conformada por una sola persona jurídica en cualquiera de sus modalidades, para organizar adecuadamente la prestación del servicio, y agrega que, esta consolidación no afectará los patrimonios o la individualidad social de cada una de las concesionarias para los efectos de la administración de las líneas, rutas o piqueras.

Como se desprende de la confrontación de estos dos artículos, el artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 186 de 1992 exige un requisito adicional a los que exige la Ley a los concesionarios que presten servicio de transporte en una misma línea. Esto es así puesto que la ley sólo exige que los transportistas que presten dicho servicio se organicen bajo la modalidad de personas jurídicas, dentro de un período perentorio, para reconocerles el derecho de concesión, pero no les obliga, como sí lo hace el artículo 14 impugnado, a que a su vez estos concesionarios o personas jurídicas distintas, que ya gocen del derecho de prestar el servicio, se consoliden en una sola organización, tal como lo establece novedosamente el mencionado artículo 14 del decreto reglamentario.

Esta Sala en la resolución dictada el 26 de octubre de 1993, para resolver la solicitud de suspensión provisional de los efectos del artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 186 de 28 de junio de 1993, expresó:

"Ocurre que en nuestro país, la constitución, trámite y formalidades para la organización de empresas consolidadas no están

instituidas de manera típica en nuestro ordenamiento jurídico. Varias empresas pueden ser accionistas de otra, pero por ello esta última no adquiere el carácter de consolidada en la forma de que trata el artículo 14 antes mencionado.

Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 251 del Código de Comercio preceptúa lo siguiente:

"Artículo 251. ...

La ley no reconocerá la existencia de las sociedades que no estuvieren constituidas de acuerdo con los trámites y formalidades prescritos por ella; sin embargo, la nulidad del contrato de sociedad o la disolución de ésta no perjudicarán las acciones que correspondan a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados por razón de los negocios ejecutados por la compañía".

Resultando problemática la constitución de la persona jurídica de empresas consolidadas de que trata el artículo 14 antes citado podría resultar en nulidades y perjuicios que deben evitarse. En todo caso, al resolver sobre el fondo se dilucidará con mayor precisión este extremo.

..."

El artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 186 de 1993, impone a los transportistas una forma de organización que, además de no estar contemplada en el artículo 18 de la Ley Nº 14 de 1993, no está regulada en ninguna norma de nuestro ordenamiento positivo, rebasando así, a juicio de la Sala, lo normado en el mencionado artículo 18, que pretende reglamentar.

La potestad reglamentaria es conferida al ejecutivo para desarrollar las leyes a fin de facilitar su ejecución, en beneficio del interés público. Esta facultad debe ejercerla el Ejecutivo sin abuso o desviación de poder, so pena de nulidad.

El artículo 15 del Código Civil preceptúa que las órdenes y demás actos ejecutivos de gobierno, expedidos en

ejercicio de la potestad reglamentaria no tienen fuerza obligatoria y no deben aplicarse cuando sean contrarias a la Constitución o a las leyes, y por su parte el artículo 757 del Código Administrativo establece que en caso de disposiciones contradictorias, prevalece la ley sobre el reglamento.

En mérito de lo expuesto, la Sala debe declarar que el artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 186 de 1993 es violatorio del artículo 18 de la Ley Nº 14 de 1993, y no entrará a conocer del resto de los cargos de violación alegados por la parte actora, por ser inconducente esa labor.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL, el artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 186 de 28 de junio de 1993, dictado por el Presidente de la República y el Ministro de Gobierno y Justicia, para reglamentar la Ley Nº 14 de 26 de mayo de 1993, por la cual se regula el transporte terrestre público de pasajeros y se dicta otras disposiciones.

NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE

MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

ARTURO HOYOS

EDGARDO MOLINO MOLA

AVISOS Y EDICTOS

<p>AVISO</p> <p>De acuerdo a lo que establece el Artículo 777 del Código de Comercio, informo que mediante Escritura Pública número 9460 del día 20 de octubre de 1995, he</p>	<p>vendido el establecimiento comercial denominado SUPER MERCADO ALTOS DE LA PULIDA, ubicado en Calle Principal La Pulida, S/N, corregimiento José D.</p>	<p>el Espinar. José Chan Ng PE-2-954 L-028-588-81 Tercera publicación</p>	<p>Al tenor del Artículo 777 del Código de Comercio, al público aviso que mediante Escritura Pública Nº 9273, de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá, y fechada del día 10 de</p>	<p>octubre de 1995, he vendido al señor MING SANG JOW WONG, con cédula de identidad personal Nº PE-11-536, el negocio de mi propiedad denominado COMISARIATO.</p>
--	--	---	--	---

BODEGA Y CARNICERIA SANG, amparado con la Licencia Comercial Nº 22815, y ubicado en San Miguelito, Sector Santa Marta, Calle Principal Nº L-34.

Manuel Yau Peralta
Cédula 5-17-114
L-028-599-42
Segunda publicación

AVISO

Al tenor del Artículo 777 del Código de Comercio, al público aviso que mediante Escritura Pública Nº 9430, de la

Notaría Undécimo del Circuito de Panamá, y fechada del día 16 de octubre de 1995; he vendido al señor **CHAU PIN CHONG**, con cédula de identidad personal Nº N-18-417, el negocio de mi propiedad denominado **MINI SUPER ARTURO**, amparado con la Licencia Comercial Nº 47577, y ubicado en Santa Librada 1ra. Etapa, Calle La Pera, Nº B-15, Distrito de San Miguelito.

Hé Kim Yu de Díaz
Cédula N- 17-978

L-028-659-34
Segunda publicación

AVISO

Al tenor del Artículo 777 del Código de Comercio, al público aviso que mediante Escritura Pública Nº 628, fechada el día 19 de enero de 1995, de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, he adquirido del Señor **DOROTEO PASCUAL**, con cédula de identidad personal Nº 2-44-331, el negocio de su propiedad denominado: **ABARROTERIA Y CARNICERIA PASCUAL**,

amparado con la Licencia Comercial Nº 46802, y ubicado en Ciudad Jardín Las Maniñitas, Sector Nº 20, Tocumen.

Ng. Kaut Falt
Cédula: PE-9-1305
L-028-568-97
Segunda publicación

AVISO

Por este medio se informa que la sociedad **INVERSIONES YUYO, S.A.**, la cual se encuentra inscrita a la Ficha 277295, Rollo 39874, Imagen 0191 de la Sección de

Micro películas (Mercantil) del Registro Público, vende o traspasa el negocio denominado **REY DEL CALZADO Nº 2** a la sociedad **PARK WEST HOLDINGS, S.A.**, inscrita a la Ficha 282604, Rollo 41195, Imagen 0012 de la Sección de Micro película (Mercantil) del Registro Público.

(Fdo. MARTA DE GONZALEZ, Representante Legal de **INVERSIONES YUYO, S.A.**)
L-028-349-76
Primera publicación

CONCESIONES

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MINERALES
RESOLUCION Nº 18
PANAMA, 24 DE OCTUBRE DE 1995
LA MINISTRA DE COMERCIO E INDUSTRIAS
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:

Que la concesionaria **EXTRACCIONES ARCI-CAL, S.A.**, es titular del Contrato Nº 43 del 7 de abril de 1974, mediante el cual se otorgó derechos de extracción de minerales no metálicos (piedra, caliza y arcilla), en dos (2) zonas de 998.8 hectáreas, ubicadas en

los Distritos de Colón, Provincia de Colón e identificadas con el símbolo **EACSA-MC-73 - 20 (piedra, caliza y arcilla)**;

Que mediante memorial presentado en tiempo oportuno, por la Lda. Inés María Fernández de Lara de la firma forense **GALINDO, ARIAS & LOPEZ**, actuando como Apoderado Especial de la empresa **EXTRACCIONES ARCI-CAL, S.A.**, se solicitó la prórroga al Contrato Nº 43 del 7 de abril de 1974;

Que el Artículo 14 de la Ley 109 del 8 de octubre de 1973 del Código de Recursos Minerales faculta al Órgano Ejecutivo para prorrogar hasta por igual término de duración el Contrato, siempre y cuando el

contratista haya cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones y acepte todas las obligaciones que establezca la Ley vigente, las prórrogas podrán solicitarse hasta cinco (5) años antes del vencimiento del Contrato.

Que mediante Liquidación de Ingresos Nº 73266 del 20 de abril de 1994 y Nº 76994 de octubre de 1994, la concesionaria hizo efectivo el pago de la Cuota Inicial a que se refiere el Artículo 271 del Código de Recursos Minerales;

Que mediante Liquidación de Ingresos Nº 306.780.87 del 13 de abril de 1994 la concesionaria pago los cánones superficiales correspondientes, de

conformidad con el Artículo 15 de la Ley 109 del 8 de octubre de 1973;

Que la concesionaria ha cumplido con todos los requisitos necesarios para tener derecho a lo solicitado, incluyendo el Informe Ambiental y sus Anexos.

RESUELVE:

PRIMERO: PRORROGAR por el término de diez (10) años contados a partir del 7 de junio de 1994, la concesión de extracción otorgada a la empresa **EXTRACCIONES ARCI-CAL, S.A.**, mediante Contrato Nº 43 del 17 de abril de 1974 e identificada con el símbolo **EACSA-MC - (piedra, caliza y arcilla) 73-20**.

SEGUNDO: Considerar el Informe Ambiental y

sus Anexos como parte integral de la concesión y será de obligatorio cumplimiento por la concesionaria.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 14 de la Ley 109 del 8 de octubre de 1973.

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y PUBLIQUESE.

NITZIA RODRIGUEZ DE VILLARREAL
Ministra de Comercio e Industrias
LICDO. JOSE A. TROYANO
Viceministro de Comercio e Industrias

Notificado el interesado a los 24 días del mes de octubre de 1995
Es copia de su original, Panamá, 24 de octubre de 1995
L-028-684-54
Única publicación

EDICTOS AGRARIOS

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
REGION 1, CHIRIQUI
EDICTO Nº 307-95

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la Oficina de Región Nº 1, al

público,
HACE SABER:
Que el señor **EMERITA ARAUZ**, vecino (a) del Corregimiento de Progreso, Distrito de Barú, portador de la cédula de identidad personal Nº 4-271-681, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud Nº 4-0026 según plan aprobado Nº 406-04-8774, la adjudicación a Título Compra de una

parcela de terreno que forma parte de la Finca 529, inscrita al Tomo 654, Folio 230 y de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de un área superficial de 0 Has. + 608m.19 M2, ubicada en el Corregimiento de Progreso, Distrito de Barú, Provincia de Chiriquí, comprendida entre los siguientes límites: NORTE, Alameda Araúz SUR, Calle principal

ESTE: Rogelio Ponte, OESTE: Carretera a Puerto Armuellés a Paso Canoas. Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho, en el de la Alcaldía del Distrito de Barú y copias del mismo se entregaran al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal

como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Chiriquí a los 24 días del mes de julio de 1995.

JOYCE SMITH V.
Secretaria Ad-Hoc
ING. FULVIO ARAUZ
Funcionario Sustanciador
L-343-476-70
Única Publicación R